

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 11º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-1942-2021
CARATULADO : ARAVENA/FISCO DE CHILE / CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, nueve de agosto de dos mil veintidós.

Visto:

Que compareció don **Nelson Guillermo Caucoto Pereira**, abogado habilitado, domiciliado en Doctor Sótero del Río N° 326, oficina 1104, comuna de Santiago, en representación de doña **Lucía Elianira Aravena Mardones**, técnica en administración de recursos humanos, domiciliada en Amado Nervo N° 274, comuna de La Reina, doña **Corina Margarita Aravena Mardones**, pensionada, domiciliada en Bjursvagen N° 40, NB, código postal N° 19466 Upplanda Vasby, ciudad de Estocolomo, Suecia y, don **Luis Octavio Aravena Mardones**, economista, domiciliado en Santa Amalia N° 1064, casa 18, comuna de La Florida, y deducen demanda civil de indemnización de daños y perjuicios en juicio ordinario, en contra del **Fisco de Chile**, persona jurídica de derecho público, representado legalmente por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don **Juan Antonio Peribonio Poduje**, abogada, ambos con domicilio en Agustinas N°1687, Santiago, y solicitan que en definitiva la demandada sea condenada al pago de la suma de **\$360.000.000** (trescientos sesenta millones de pesos), correspondiendo a cada uno de los demandantes la suma de \$120.000.000, más reajustes de acuerdo a la variación del índice de Precios al Consumidor e intereses que la cantidad devengue desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo, o la suma que el tribunal determina en justicia, con costas.

Relato de doña Lucía Elianira Aravena Mardones.

Refirió en cuanto al relato de la historia de su representada, que al momento del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, tenía tres hijos de 5 y 3 años y una bebé de 6 meses de edad y se encontraba casada con Jaime Contreras Márquez.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JCXQXXGZXXX

Añadió que para ese tiempo trabajaba en la Tesorería General de la República, como funcionaria administrativa y tenía una vida tranquila y feliz junto a su familia, lo cual cambió, luego de la muerte de su hermano Jorge de 23 años, quien fue asesinado el 11 de septiembre de 1973 por agentes del Estado.

Agregó que, ante la noticia, temía por la vida de su madre, que padecía una grave insuficiencia cardíaca, lo cual se hizo más trágico con el sonido de los disparos y los vuelos rasantes de aviones y helicópteros, y la gran cantidad de militares invadiendo la población en donde vivían, sumado a que a los pocos días comenzaron los allanamientos al sector y a su casa en particular, por parte de uniformados y de la policía de investigaciones.

Sostuvo que con la tragedia la familia se derrumbó y que no podía asimilar la muerte de su hermano. Por su parte, sus hermanos Corina y Luis debieron asilarse por la persecución en su contra, quedando sola con sus padres. Luego tuvo que lidiar con la detención de su marido, quien era sub-oficial de la Fuerza Aérea de Chile, él que fue detenido y torturado por no cumplir con su “deber de militar”, siendo condenado a 351 días por incumplimiento de deberes militares y posteriormente conmutada su pena por extrañamiento.

Precisó que la situación dramática del dolor, el duelo, la incertidumbre por la suerte de su marido preso y torturado, debió enfrentarla sola, cuidar a sus hijos y padres sumidos en una gran depresión por la pérdida de su hijo, debiendo los gastos médicos de todos ellos, ya que con la muerte de su hermano y detención de su marido el ingreso se redujo sólo a su sueldo más las pensiones bajas de sus padres jubilados.

Hizo presente que intentó conservar su trabajo por el único sostén económico, pero la hostilidad y discriminación de la que fue objeto la obligó a presentar la renuncia en agosto de 1974. Luego de eso, refiere que la situación económica era insostenible, lo cual le causó mucho dolor, pero su mayor miedo era peor, a caer presa por alguna razón y tener que dejar a sus hijos.

Manifestó que a pesar de los años que han pasado aún no puede resolver sus conflictos interiores por la muerte Jorge, con quien tenía una



estrecha relación, era su regalón, él se preocupaba siempre por su desarrollo como hermana y mujer, siendo él quien le buscó el trabajo en la Tesorería.

En cuanto a los daños que todo esto le ha provocado, sostuvo que nunca he hecho el duelo ya que sus preocupaciones eran demasiadas, apoyar a sus padres y criar a sus hijos, además de apoyar a su marido, viendo quebrados sus proyectos personales y familiares, padeciendo de insomnio y fuertes dolores de cabeza, situación que se mantiene hasta el presente. Indicó que aún tiene episodios de angustia, problemas estomacales severos y sus hijos aún se tratan médicamente por problemas de ansiedad e inseguridad que les ha traspasado.

Relato de doña Corina Margarita Aravena Mardones.

Sostuvo que para el golpe militar tenía 21 años, estaba casada y tenía dos hijas de 3 y 1 año respectivamente. Vivía junto a su marido e hijas y trabajaba en la Secretaría General de Educación Secundaria del Ministerio de Educación hasta el día 11 de septiembre de 1973, día en que la vida familiar se rompió tras el asesinato de su hermano Jorge Claudio Aravena Mardones, de tan solo 23 años de edad.

Manifestó que la tragedia de perder a su hermano fue un dolor muy intenso, por lo que al día siguiente de la muerte de su hermano decidió retornar a la casa de sus padres, ya que la tranquilidad y estabilidad emocional que siempre tuvo ya no existía.

Agregó que desde ese día a todo fue terror y persecución ya que la casa de sus padres fue constantemente allanada, por ello, el 17 de diciembre de 1973 tuvo que viajar a México con sus hijas, lugar donde la esperaba su marido y hermano, ya que ese país les había otorgado asilo político, situación que le produjo un dolor indescriptible por tener que dejar al resto de su familia en Chile, por no saber qué pasaría con ellos, siendo un periodo de gran sufrimiento.

Añadió que desde México viajó a Alemania, lugar donde se le brindó estabilidad y seguridad material, pero emocionalmente estaba mal, simplemente destrozada, trabajó en una fábrica, intentó estudiar, pero ninguna tarea que abordaba podía concluirla, ya que sus pensamientos



estaban en Chile y su familia, encontrándose y desesperada, lo que conllevó a que cayera en una depresión viendo como única salida el suicidio, de lo cual pudo salir adelante con terapias.

Indicó que cuando se dio a conocer las listas de personas que tenían prohibición de ingresar al país, no aparecía su nombre, por lo que decidió regresar junto a sus hijos, ya que los nombres de su marido, hermano Luis y cuñado Jaime Contreras figuraban en esas listas, por lo que ellos tuvieron que mantenerse fuera de Chile.

Refirió que regresó el 29 de enero de 1979 con sus hijas de 8 y 6 años, y un hijo de 8 meses de edad nacido en Alemania, pero luego comenzó una etapa extremadamente difícil ya que no contaba con respaldo económico y su madre se encontraba enferma. Por otro lado, ella estaba feliz de estar con sus padres en Chile, pero era doloroso constatar que sus hijos no se encontraban bien, ya que extrañaban a su padre e infancia en Alemania.

Expuso que logró conseguir trabajo en una empresa importadora de camiones alemanes, iniciando a fines del año 1979 una relación con Nelson Herrera hasta el día de hoy. Paralelo a su trabajo, se integró a la Comisión Chilena de DDHH en el Comité pro-retorno, posteriormente en los Derechos de la Mujer y luego junto a su pareja en la formación de comités de base de DDHH en las poblaciones de la zona sur de Santiago, siendo presidenta del Comité de DDHH en la Población San Joaquín.

Expuso que en el año 1984 su marido fue secuestrado por la CNI, pero gracias a su trabajo como activista de los DDHH fue liberado al día siguiente, después de una noche de tortura y flagelación. Luego, en el Día Internacional de La Mujer de 1985 se realizó una manifestación frente a la Iglesia San Francisco, donde fue agredida y luego detenida por varias horas en una comisaría, siendo dejada en libertad. Posterior a ello, en la madrugada de los primeros días de septiembre de 1985 llegó la CNI, allanó la casa y la detuvieron junto a su esposo por 11 días donde después los relegaron a Freirina y a Mejillones. En diciembre les levantaron la pena y regresaron a Santiago, todo lo que causó mucha afectación a sus hijos, ya que después tuvieron seguimientos constantes y amenazas de muerte, por



lo que, con el apoyo de la Vicaría de la Solidaridad, Suecia les concedió asilo político, decidiendo irse, lugar hasta donde viven hoy.

Señaló que han tratado con su familia llevar una vida normal en Suecia, pero aún quedan en sus hijos los traumas de la persecución constante, los allanamientos, el ruido de los helicópteros, los llamados de madrugada. También ha tenido que aceptar que tiene que vivir con el corazón partido, teniendo en Chile a sus hermanos.

Concluyó que la muerte de Jorge fue una tragedia muy difícil de aceptar por años y sólo cuando recibió tratamiento pudo aprender a convivir con el dolor.

Relato de don Luis Octavio Aravena Mardones:

Expuso que mantenía una cercana relación con su hermano Jorge y desde adolescentes participaron en el movimiento estudiantil y simultáneamente en la organización juvenil del Partido Socialista, donde su hermano fue elegido dirigente del Centro de Alumnos de esa Escuela Industrial. Posteriormente, fue elegido para la directiva de la Federación Nacional de Estudiantes Industriales de Chile.

Agregó que llegado el proceso de formación de la candidatura de Salvador Allende y la Unidad Popular, a fines de 1969, su participación se hizo aún más intensa. Luego, con el triunfo de Salvador Allende, Jorge asumió otras tareas, encontrando trabajando en la empresa pública Chilefilm, cuando llegó el Golpe de Estado el 11 de septiembre, día en que su hermano es asesinado por un grupo de soldados.

Sostuvo que la acción en la cual matan a Jorge, la siguió intensamente, puesto que si bien no vio los detalles, escuchó con desesperación, a poca distancia, ya que iba corriendo a pocos metros detrás de él, siendo el primero que llegó a atenderlo y a constatar su muerte.

Luego de ello, tuvo asilo en una embajada siendo dirigido a México, para posteriormente ser trasladado a Alemania, lugar donde estudió economía de empresa, donde se tituló como ingeniero económico en la Universidad Friedrich Schiller, de la ciudad de Jena.



Hizo presente que sintió mucho dolor por la pérdida de su hermano, por la separación irremediable de sus padres a la que se vio forzado, a la distancia geográfica con sus hermanas.

Señaló que los primeros años, veía y hablaba con Jorge cada noche, volviéndose real para él, además de tener pesadillas.

Refirió que cada 11 de septiembre realizan actividades para rememorar a su hermano, así también como celebran su cumpleaños cada año.

Concluyó que todos estos episodios quebraron su vida y desarrollo personal, ya que sus padres quedaron solos, su hermana con su marido preso por razones políticas, su otra hermana con su marido escondido, igual que él, debiendo esconderse de las fuerzas policiales y militares que causaban terror, lo que quebró sus proyectos de vida, en la que siempre estaba presente e incluido su hermano.

Se hizo presente que don Jorge Claudio Aravena Mardones ha sido calificado como víctima en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, más conocido como “Informe Rettig” y, además, actualmente se encuentra en tramitación una causa criminal por estos hechos, substanciada por la Ministra en Visita Extraordinaria de la Il. Corte de Apelaciones de San Miguel, Sra. Marianela Cifuentes Alarcón, causa Rol N°23-2011 VE, y se encuentra en estado de sumario.

En cuanto al aspecto jurídico, fundó su demanda, en los tratados internacionales sobre derechos humanos, en especial sobre delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, artículos 6, 7 y 38 inciso 2 de la Constitución Política de la República, en cuanto a la responsabilidad extracontractual del Estado y la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, y diversa jurisprudencia entre otros.

Indicó además, la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, según lo que establecen los artículos 4,5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por los números 1 y 7 del artículo 19 de la Carta Fundamental.



Citó además sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en causa Rol N°5570-2007, artículo 29 del del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

Concluyó manifestando que la idea de reparación se trata de una obligación compleja e indisoluble constituida por el deber de investigar los hechos, la obligación de sancionar a los responsables y la obligación de reparar adecuadamente a las víctimas, y esta última obligación tiene que ser tratada como un deber imprescriptible.

Hizo presente que el fundamento en virtud del cual un Estado queda obligado a la ejecución de una reparación determinada frente a una persona que haya sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales mediante ilícitos que la conciencia jurídica universal considera intolerables, se rige por las normas y principios del derecho público e internacional de los derechos humanos logrando sujetar dentro de sus esferas, por vía de la progresividad normativa, un sistema de responsabilidad autónomo que se conforma transversalmente desde los primeros acuerdos interestatales.

Planteó que las excepciones como la excepción de preterición legal de los hermanos, la excepción de pago y la excepción de prescripción extintiva de la acción civil reclamada históricamente por el Fisco en el tema de las reparaciones civiles hecha valer en el juicio penal, es un tema definitivamente zanjado por los Sres. Ministros que conocen de causas por violaciones de los derechos humanos, lo que ha sido ratificado por la Segunda Sala Penal de la Excm. Corte Suprema, fallando a favor de la pretensión de las víctimas directas y sus familiares, sintonizando de esa manera los jueces aludidos con la normativa internacional que propende a esa reparación mediante instancias expeditas y no dilatorias.

Sostuvo en cuanto al daño provocado e indemnización que existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima que, como hermanos de Jorge Claudio Aravena Mardones, que les ha tocado soportar a sus representado, el cual según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional, amerita ser reparado, mediante la indemnización.



Añadió que las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia tienden a definir el daño moral como “aquél que lesiona un derecho extramatrimonial de la víctima”, junto con afirmar que “es la lesión o agravio, efectuado dolosa o culpablemente, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona y que es imputable a otro hombre” (Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 13 de marzo de 1985, Revista de Derecho y Jurisprudencia 8RDJ), Tomo LXXXII, sec 2, página 6).

Agregó que en cuanto a la prueba del referido daño moral en sede judicial, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere ser probado en juicio en tanto se tenga por acreditado el hecho ilícito que lo ha generado y basta que la víctima acredite la lesión de un bien jurídico personalísimo para que luego, entonces, se infiere como consecuencia necesaria el daño sufrido, con ocasión del hecho ilícito cometido.

Citó jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en causa rol ingreso N°2097-2004.

Plantearon a título de daño moral, la suma total de \$360.000.000 (trescientos sesenta millones de pesos), correspondiéndole a cada uno de los demandantes doña doña Lucía Elianira Aravena Mardones, doña Corina Margarita Aravena Mardones y don Luis Octavio Aravena Mardones la suma de \$120.000.000 (ciento veinte millones de pesos), a título de indemnización por el daño que se les ha causado como consecuencia directa de los crímenes cometidos en la persona de su hermano, don Jorge Claudio Aravena Mardones, por parte de agentes del Estado de Chile, o bien, lo que esta Judicatura determine en Justicia y equidad.

Finalmente, solicitaron la condena respectiva.

Por escrito de 20 de mayo de 2021, compareció doña **Ruth Israel López**, abogada procuradora Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, Fisco de Chile, domiciliados en Agustinas 1687, Santiago, quien contestó la demanda civil de indemnización de perjuicios y solicitó su rechazo, con costas, o en subsidio, fijar el monto de la indemnización que



podiera corresponder, teniendo presente lo expuesto y los beneficios patrimoniales y extrapatrimoniales ya percibidos a través de reparación.

Alegó en primer lugar, se opuso la excepción de improcedencia de la indemnización demandada, por haber sido preteridos legalmente los demandantes, por su calidad de hermanos de la víctima.

Señaló que la Ley N°19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a los familiares más directos, mediante prestaciones en dinero con lo que, sin desfinanciar la caja fiscal, permitió y permite que numerosas víctimas, obtengan mes a mes una reparación monetaria, sin que por ello el Estado deje de cumplir con sus otras obligaciones de interés público. Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos.

Hizo presente que este tipo de indemnizaciones ha significado a diciembre de 2015 en concepto, a saber: a) Pensiones, por la suma de \$247.751.547.837., como parte de las asignadas por la Ley 19.123; b) pensiones por \$648.871.782.936, como parte de las asignadas por la Ley 19.992; b) Bonos, por la suma de \$41.910.643.367 asignada por la ley 19.980 y \$23.388.490.737, por la ley 19.992; d) desahucio por la suma de \$1.464.702.888, asignado por medio de la Ley 19.123 y e) Bono extraordinario por la suma de \$23.388.490.737, por lo que a diciembre de 2015, el Fisco habría desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.

En segundo lugar, alegó la excepción sobre reparación integral por haber sido ya indemnizadas los demandantes en cuanto al daño sufrido por la detención ilegal y ejecución ilegal de su hermano Jorge Claudio Aravena Mardones, mediante el conjunto de reparaciones de diverso orden, incluyendo las simbólicas y de beneficios de salud, a través del programa PRAIS.

Sostuvo que el hecho que los demandantes no hayan tenido derecho a un pago en dinero, -por la preterición legal- no significa que no hayan obtenido reparación por el daño sufrido, por lo que alega la satisfacción de ésta, ya que, tratándose en la especie de un daño extrapatrimonial, su



compensación no se desenvuelve necesariamente en el aspecto netamente económico, sino que es posible reparar mediante la entrega de otras importantes prestaciones, como aconteció en el caso de autos, y que vinieron a satisfacer al daño moral sufrido.

Agregó que las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelaron que tras toda la reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades pública a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos, y dicho concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación propusieron como programa de reparación.

Añadió que los programas incluyeron beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos, otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero, por lo que no es un secreto que las transiciones han estado en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones, y basta para ello revisar las discusiones originadas en la aprobación de la Ley N°19.123, para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego.

Indicó que la Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamado Comisión Rettig, en su informe final propuso una serie de “propuestas de reparación”, entre las cuales se encontraban diversas prestaciones, no solamente pecuniarias, siendo éstas últimas reservadas sólo para la denominada familia.

Agregó que la comisión entendió como reparación, “un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho informe”. De esta forma, en la discusión de la ley 19.123 en diversas oportunidades se hizo referencia a la reparación “moral” buscada por el proyecto.

Hizo presente que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se concretó también por reparaciones simbólicas, y no meramente pecuniarias, a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones y que permitieran recuperar el honor, dignidad y buen nombre. Este tipo de



acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor, sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral.

Expuso que la doctrina, en la materia, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

Afirmó que en el caso de personas como las de autos, las satisfacciones reparativas se orientaron en una línea distinta a la meramente económica, entre otras, la ejecución de diversas obras de reparación simbólica, como lo fue la construcción de diversos memoriales, decreto N°121 sobre el día nacional el detenido desaparecido, construcción de museos de memoria y derechos humanos, Premio Nacional de los Derechos Humanos, entre otros. Además, los actores son titulares por ley de Programas de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS).

Concluyó señalando que el cúmulo de reparaciones indicadas ha producido satisfacción de los mismos daños cuya reparación se persigue. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación, al haber compensado precisamente aquellos daños, no pueden, por ello, ser exigidos nuevamente.

Opuso la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en artículo 2332 del Código Civil, en relación con artículo 2497 del cuerpo legal, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes.

Indicó que, según lo expuesto en la demanda, la muerte de Jorge Aravena Mardones se produjo el 11 de septiembre de 1973.

Añadió que siendo el caso que entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de justicia, basta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda,



ello es, el 3 de mayo de 2021, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.

En subsidio, opuso la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos del artículo 2515, en relación al artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y atendida la fecha de notificación de la acción civil, transcurrió con creces el plazo que establece el artículo 2515.

Planteó que todos los derechos y acciones son prescripciones, y como tal, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Expresó que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras.

Añadió que efectivamente las normas del Título XLII del libro IV del Código Civil, que la consagran, y en especial, párrafo I, se ha estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no solo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, disposición que consagra un carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares, la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Refirió que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe duda renunciarla anticipadamente, por lo que la responsabilidad que se le atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tiene la misma finalidad: resarcir extramatrimonialmente a través de un incremento patrimonial del afectado.

Citó como abono a su alegación, sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de 21 de enero de 2013, en donde se zanjó que el principio



general que debe regir en la materia es el de la prescriptibilidad y diversas convenciones internacionales sobre la materia.

En cuanto al daño e indemnización reclamada, en subsidio alega que, en la fijación del daño moral por los hechos de autos, se debe considerar, en lo que corresponda, los pagos recibidos a través de los años por los actores de parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123; 19.980) y también los beneficios extra patrimoniales que estos cuerpos legales concedieron, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral.

Exponen que de no acceder a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Además, hacen presente que para la regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia.

Alegó también que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Sostuvo que, a la fecha de la deducción de la demanda a tramitación, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto, no existe ninguna suma que deba reajustarse.

Hizo presente que los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

Señaló que el reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal, por lo que no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.



Adicionó que el artículo 1551 del Código Civil, el cual establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Por escrito de 1 de junio de 2021, la demandante evacuó el **trámite de réplica**, en el cual aparte de reiterar los fundamentos de hecho y de derecho ya expuestos en la demanda, manifestó que las alegaciones de excepción de preterición legal y reparación satisfactiva son erradas, ya que, los montos que otorga la Ley 19.123 sólo constituyen pensiones de sobrevivencia por los actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 y 1990, pensiones de las cuales no gozan sus representados, por el grado de parentesco con la víctima y, por otro lado las reparaciones simbólicas, en ningún caso reparan íntegramente el dolor experimentado por los seres queridos de don Jorge Aravena Mardones, menos aún el experimentado por familiares tan cercanos como sus hermanos, personas que vivían con él y compartían su día a día, y eran enormemente cercanos, y es por tal motivo que se ha interpuesto la presente demanda.

Con todo, agrega que nunca un Tribunal de la República ha fijado el monto de la reparación que deben obtener sus representados, por lo que no sería entonces un crédito líquido y actualmente exigible, siendo evidente que desde el punto de vista jurídico no cabe acoger la excepción alegada.

Adicionó que la demandada reconoce por medio de sus alegaciones que se produjo un crimen de lesa humanidad y que ese crimen produjo un daño moral a las víctimas y demandantes. Por lo demás, los “pagos” que realiza el Fisco de Chile implican un acto real y un reconocimiento implícito y explícito de la responsabilidad que le cabe, extinguiendo de tal manera la prescripción de la acción que además alega. Más aún reconoce el deber de indemnizar, cuestión que debería hacer en todo caso con los demandantes.

Concluyó que la propia Ley N°19.123 no considera incompatibles las reparaciones económicas y, menos entonces, las reparaciones simbólicas.

En cuanto a la excepción de prescripción, destaca que la Excm. Corte Suprema ha variado el criterio otorgándole el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de lesa



humanidad atentatorios contra los derechos humanos concediendo así la correspondiente indemnización.

Refirió en cuanto al daño e indemnización reclamada, se ha señalado un monto específico pues una demanda indemnizatoria nos exige pretensiones concretas, pero que hay dinero que supla el dolor experimentado por sus mandantes, además en el petitorio se indica que se pide lo que el tribunal estime.

Sobre los reajustes señaló que una correcta aplicación del artículo 1557 en relación al artículo 1551 del Código Civil, normas aplicables supletoriamente al estatuto de responsabilidad extracontractual del Estado, determinaría que los reajustes e intereses aplican desde la fecha de interposición de la demanda.

Por escrito de 10 de junio de 2021, la demandada evacuó el **trámite de dúplica**, en el cual manifestó ratificar la totalidad de los argumentos expresados en el escrito de contestación, añadiendo que los actores ya han sido indemnizados en virtud de las reparaciones establecidas por la ley.

Precisó que la ley 19.123 y otras posteriores han buscado resarcir de un modo general y equitativo, los daños provocados durante la dictadura militar, mediante una reparación pecuniaria directa, mediante la entrega de bonos o pensiones en dinero a los familiares más cercanos, a saber, padres, hijos y cónyuge de víctimas de violaciones a los derechos humanos. En el mismo contexto, se excluyó a los hermanos y a otros parientes más lejanos, de dichas reparaciones pecuniarias, por preterición legal, sin embargo, se les incluyó dentro de los beneficios otorgados mediante prestaciones estatales y dentro del conjunto de reparaciones simbólicas, que miradas en su conjunto y bajo el contexto descrito al contestar la demanda, se puede concluir que el Estado de Chile ha reparado el daño provocado.

Manifestó en cuanto a la excepción de prescripción que, al tratarse de una acción exclusivamente pecuniarias, que persigue una suma de dinero y ningún otro aspecto en lo integral, no hay en la réplica fundamento alguno que justifique la imprescriptibilidad, dado que no hay tratado, convención o



declaración del derecho humanitario que establezca e imponga una acción indemnizatoria ilimitada en el tiempo.

Añadió que siempre ha quedado claro que en materia de prescripción se hace una distinción nítida que surge de los objetivos sociales perseguidos, diferenciando el aspecto penal del civil. cada uno de dichos aspectos tiene una regulación diferente, como se explicó al contestar la demanda. La analogía o coherencia que se exponen en algunos fallos no tienen la suficiente claridad y sustento para entender que las responsabilidades penales y civiles, en caso de delitos de lesa humanidad, constituyen una unidad indisoluble. En lo que hay claridad y cierta uniformidad doctrinaria y jurisprudencial está referido a la imprescriptibilidad de las acciones penales para perseguir tales ilícitos, lo que se ve refrendado por la existencia de tratados que así, en forma expresa, lo establecen. Sin embargo, ello no ocurre en la parte civil derivada de los mismos.

Agregó en cuanto al monto demandado, que su parte estima que es excesivo, y que dicha consideración no ha cambiado en razón de los montos fijados en otras causas, respecto de las cuales también se sostuvo que eran desproporcionados.

Hizo hincapié, en cuanto a la fecha desde la cual se deben calcular los intereses, que ello sólo puede ocurrir desde que el fallo quede firme y a partir de la mora del deudor en el cumplimiento de la obligación.

Mediante resolución de 23 de junio de 2021, **se recibió la causa a prueba**, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: **1.-** Efectividad de haber sido asesinado don Jorge Claudio Aravena Mardones, por agentes del Estado. Fecha y circunstancias del fallecimiento. **2.-** Si algún(os) pariente(s) del fallecido ha(n) recibido algún bono, pensión y/o cualquier otra transferencia directa de dinero consagrada por la Ley 19.123, Ley 19.980 o cualquier otra normativa establecida al efecto. Fecha, cantidad y beneficiario(s). **3.-** Existencia de los perjuicios demandados. En la afirmativa: origen, naturaleza y monto de los mismos.

Por resolución de 22 de junio de 2022, **se citó a las partes a oír sentencia.**

Considerando:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JCXQXXGZXXX

Primero: Que ha comparecido don **Nelson Guillermo Caucoto Pereira**, abogado habilitado, en representación de doña **Lucía Elianira Aravena Mardones**, doña **Corina Margarita Aravena Mardones**, quienes dedujeron demanda civil de indemnización de daños y perjuicios por en juicio ordinario, en contra del **Fisco de Chile**, persona jurídica de derecho público, representado legalmente por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don **Juan Antonio Peribonio Poduje**, y solicitaron que en definitiva la demandada sea condenada al pago de la suma total de \$360.000.000 (trescientos sesenta millones de pesos), correspondiendo \$120.000.000 para cada uno de los demandantes, más reajustes de acuerdo a la variación del índice de Precios al Consumidor e intereses que la cantidad devengue desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo, o la suma que el tribunal determina en justicia, con costas.

Fundamentaron su demanda de indemnización de perjuicios en antecedentes de hecho y de derecho expuestos en la parte expositiva de esta sentencia.

Segundo: Que la demandada se opuso a la acción indemnizatoria, basando su solicitud de rechazo en la excepción de preterición por su calidad de hermanos de la víctima, reparación integral e improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante; excepción de prescripción extintiva; oposición al daño e indemnización reclamada. En subsidio, sostuvo que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos por el Estado y guardar armonía con los montos que establecen los tribunales y, finalmente, alegó la improcedencia del pago de reajustes e intereses, las que funda en alegaciones de hecho y de derecho ya expuestas en la parte expositiva de este fallo.

Tercero: Que conforme a las reglas de la carga de la prueba, incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o éstas, de conformidad a lo dispuesto en artículo 1698 del Código Civil.

Cuarto: Que antes de adentrarnos a las alegaciones exhibidas por la demandada, corresponde acreditar la existencia o no de los presupuestos fácticos que causaron al actor apremios ilegítimos por parte de agentes del Estado en tiempos de la dictadura militar.



Quinto: Que, para tales efecto, los actores acompañaron a la causa, la siguiente prueba instrumental no objetada de contrario:

1. Informe de evaluación de daño emitido por el Programa PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano, con fecha 25 de enero de 2021, respecto del paciente don Luis Octavio Aravena Mardones.

2. Informe de evaluación de daño emitido por el Programa PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano, con fecha 31 de enero de 2022, respecto de la paciente doña Lucía Elianira Aravena Mardones.

3. Informe de evaluación de daño emitido por el Programa PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano, con fecha 31 de enero de 2022, respecto de la paciente doña Corina Margarita Aravena Mardones.

4. Copia de la Norma Técnica N° 88 “Norma Técnica para la Atención de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el período 1973 – 1990”.

5. Sentencia de 29 de noviembre de 2018 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs. Chile”.

6. Contestación del Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs Chile”, de febrero de 2018.

7. Sentencias dictadas el 9 de diciembre de 2019, por la Excma Corte Suprema, en el ingreso Rol 16950-2019, caratulada “Calderón con Fisco de Chile”.

8. Sentencias dictadas el 6 de diciembre de 2019, por la Excma Corte Suprema, en el ingreso Rol 18179-2019, caratulada “Torres con Fisco de Chile”.

9. Sentencias dictadas el 24 de diciembre de 2021, por la Excma Corte Suprema, en el ingreso Rol 13877-2019, “Episodio Augusto Ramón Cepeda Venegas”, donde se acoge recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante, y se deja sin efecto el fallo de segunda instancia que había acogido la excepción de pago planteada por el Fisco de Chile (considerandos 16º y siguientes).



Sexto: Que, asimismo, los demandantes rindieron prueba testifical prestando su declaración en estrados los testigos don Alejandro Cid Herrera, don Fernando Arraño Oyarzún y don Richard Fuentes Farías quienes debidamente juramentados e interrogados, declararon lo siguiente:

Señaló el primero de los testigos, en cuanto a la muerte del hermano de los demandantes, que ocurrió el 11 de septiembre del año 1973 en la Población La Victoria, cerca de las 23 horas en que efectivos militares y de la Fuerza Aérea ingresan a la Población San Joaquín y La Victoria, se siente ruido de balas y a los minutos les avisan que Jorge estaba botado en una de las calles. Expuso que allí concurre con Luis a verificar lo que había ocurrido y confirman que Jorge estaba botado en la calle con varios impactos de bala, allí tratan de acomodar las partes del cuerpo que habían sido desgajadas, y lo trasladan hasta su casa en una sábana y una frazada.

Indicó que la familia estaba muy afectada y esto generó un dolor que con los años no ha sido superado por parte de su familia, ocasionando momentos muy duros para sus hermanos, el marido de Lucía fue detenido como sub oficial de la Fuerza Aérea, y con las emociones de la familia, las angustias era difícil enfrentar una situación de mucha rabia y dolor.

Agregó que pasando los días de la muerte de Jorge, la familia Aravena Mardones comenzó a sentir la destrucción de su núcleo familiar, porque después de esta situación había mucha presencia militar en el sector y también en la casa de Luis.

Añadió que cree que ese dolor no se sana y en los hermanos Aravena Mardones es absolutamente recurrente encontrarse con ellos, y recordar a su hermano en cada momento, es un dolor de mucha pregunta y de mucha preocupación en cuanto al dolor le causó a sus padres, pues la pena que la angustiaba era la muerte de su hijo, lo que dejó a sus padres y hermanos derrumbados emocionalmente.

Precisó que los hermanos debieron salir al exilio, incluso Corina fue detenida y relegada con su pareja en el norte. Cuando ellos vuelven del exilio el reencuentro con nuestro mundo de amistades, el primer evento que ocurrió fue visitar la tumba de Jorge y con ello hubieron muchos gestos de dolor y de ausencia de justicia, lo que ha sido lo más duro para ellos.



Los tres hermanos en distintos tiempos y en distintos espacios físicos han tenido tratamientos psicológicos, incluso hasta con fármacos.

En cuanto a las dificultades laborales que vivieron y cómo repercutió en su ámbito económico, sostuvo que sus padres eran funcionarios de Correos y recién pudieron volver a sus puestos de trabajo un tiempo largo después, Luis estaba terminando Historia y Geografía y trabajaba en un liceo en Puente Alto y dejó de concurrir a trabajar para no ser detenido y no pudo trabajar y sus dos hermanas que trabajaba en distintos lugares, por ejemplo Lucía trabajaba en Tesorería o en Impuestos Internos, para acompañar a su madre dejó de concurrir a su puesto de trabajo y su situación material fue muy compleja al igual que su otra hermana Corina.

El segundo testigo refirió que Jorge fue asesinado el día 11 de septiembre, no sabe la hora exacta porque no estaba presente, pero que era amigo de la familia y al día siguiente del golpe de Estado supo que estaba muerto, por lo que le contó su hermano y otros amigos que vivían cerca del lugar.

Manifestó que eran una familia muy amistosa y acogedora, pero a partir de la muerte de Jorge la familia quedó muy destruida y choqueada, en el caso de Lucy doblemente choqueada porque su marido que era sub oficial de la Fuerza Aérea también estuvo preso como un año y medio, por ello Lucy tuvo un doble daño y luego debió partir al exilio cuando salió su marido de la cárcel y de una persona alegre pasó a ser una persona muy aprensiva.

Agregó que compartió con los hermanos en el exilio, en Alemania, y al verla con su marido, tenía problemas de adaptación muy complicados para hacer su vida familiar. Cuando regresó nunca pudo adaptarse a Chile de nuevo.

Expuso que con Luis son muy amigos y también partió al exilio, era muy acogedor con sus amigos, pero tiene un tema tremendo con la muerte de su hermano, siempre dice que porque no fue él el muerto, por cuanto era mayor a Jorge y en su forma de relacionarse es muy aprehensivo y sobreprotector. Tiene un pánico a tener nuevas pérdidas. Cree que él ha



tenido consultas psicológicas por esto, porque a Luis le tocó recoger el cuerpo de su hermano en la calle y quedó muy choqueado con eso.

En el caso de Corita, su hermano era su ídolo, por lo que con su asesinato se le derrumbó su vida y un tema permanente en ella es tratar de hacer justicia por la muerte de su hermano, salió al exilio también. Y al volver fue detenida nuevamente y relegada al norte y desde ahí tuvo que volver a salir al exilio nuevamente y actualmente vive en Suecia.

Concluyó que en los tres sus vidas personales cambiaron drásticamente por lo sucedido, ellos no han podido construir una relación de familia y de pareja.

El tercer testigo expuso que conoce a la familia Aravena Mardones desde pequeño y el 11 de septiembre de 1973, gente muy cercana en la noche le dijo que los militares habrían matado a Jorge Aravena, en razón de eso concurrió a la casa de la familia en la misma noche y las personas habían recogido su cuerpo y le contaron que los militares en la calle le habían herido, se habían acercado y lo mataron a balazos, además pudo ver el cuerpo de Jorge.

Agregó que a sus hermanos los conoció porque fueron compañeros de básica y visitaba la casa, ya que la familia era muy acogedora. Pero luego de la muerte de Jorge la familia comienza a sentir la persecución, Luis se tuvo que ir al exilio, después su hermana Cory se tuvo que ir al exilio también. Lucía que estaba casada con un funcionario de Fuerza Aérea, quien también estuvo detenido por bastante tiempo, al salir éste de su detención, también se fueron al exilio. Todos separados y sus padres quedaron solos y murieron solos, por cuanto sus hijos no pudieron venir al funeral.

Cree que el daño de sus hermanos sigue hasta hoy en día, eso lo nota porque los ha visitado en varias ocasiones y, en la conversación que tiene con los tres en ellos se puede observar que sus emociones están muy fijas en la época.

En cuanto a cómo les cambió la vida añadió que Lucy tenía a su esposo militar que estuvo preso y perdió su trabajo, eso fue un daño muy fuerte para ellos porque estaban formando una familia. Por su parte Luis y



Cory debieron dejar sus proyectos de vida formativa, ambos estaban estudiando, lo que les iba a permitir desarrollarse laboralmente y por el exilio su perspectiva económica se frustró, se perdió, debieron comenzar de nuevo y eso generó un daño no solamente en lo sensible sino además en lo material.

Séptimo: Que de los antecedentes referidos en considerandos quinto y sexto de esta sentencia, valorados conforme las reglas establecidas en los artículos 1700 y 1702 del Código Civil y artículo 384 N°2 del Código de Procedimiento Civil, es posible tener por acreditado que don Jorge Claudio Aravena Mardones, fue asesinado por agentes del Estado el 11 de septiembre de 1973, en el contexto del golpe de Estado ocurrido en el país, siendo baleado en la población La Victoria.

Octavo: Que, por otro lado, se encuentra acreditado el daño directo sufrido por los demandantes, que tuvo su origen a partir de la muerte de su hermano Jorge Claudio Aravena Mardones y las consecuencias que esto trajo a la vida familiar de los demandantes, producto de las persecuciones, allanamiento y exilio a los que fueron sometidos y la gran angustia de perder a su hermano, sobretodo en el caso de don Luis quien tuvo que recoger el cuerpo de Jorge, además del exilio al cual fueron sometidos.

En este punto, especial relevancia cobran los informes emitidos por el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS) Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente de enero de 201 y 2022, respecto de la evaluación realizada a los demandantes.

En cuanto a don **Luis Octavio Aravena Mardones**, el informe da cuenta que el día del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 conlleva uno de los mayores impactos de su vida, pues en la noche de aquel día, él, su hermano y otros pobladores son atacados por agentes de Estado que allanaron la población San Joaquín. Dicho ataque devino en que su hermano don Jorge Aravena Mardones, recibiese disparos de parte de los uniformados, lo que implicó la muerte de éste. Relató que, dada la confusión del momento, su hermano se había separado de él, quien ante el asalto de los agentes de Estado corrió en dirección contraria a la de él, de



modo que no presencié directamente el asesinato, sino se encontró momentos después con su hermano fallecido en la acera.

Añade que una vez que tras el funeral, se refugia en casa de un amigo, pues sabía que estaba siendo buscado por agentes del Estado. Luego se asiló en la embajada de México, buscando con ello salir del país y salvar su vida, por ello viaja a México donde vive un mes y medio, para posteriormente mudarse a la República Democrática Alemana, viviendo 8 años y medio en Alemania oriental, país donde construye un camino laboral que le otorgó estabilidad familiar, naciendo incluso tres hijas más en ese país. Empero, por recomendación de un cercano y en busca de posibilidades de ahorro, junto a su familia se mudan a Suecia, donde continúa su desarrollo laboral.

Señaló que en 1981 fallece su madre, no pudiendo ingresar al país por ser etiquetado de peligro para la sociedad por el Estado chileno; esto a pesar de que su hermana y madre, vía carta al Ministerio del Interior, solicitaron que por razones humanitarias fuera aceptada el ingreso de don Luis al territorio nacional, lo que no obstante fue rechazado.

Relata que en 1990 retorna a Chile, debiendo afrontar además una larga cesantía, empleos de baja remuneración, junto con otras dificultades como la adaptación familiar o entender el sistema educacional. Cuenta que las complicaciones laborales se extendieron hasta 1994, año en que logra ser empleado en gendarmería, trabajando en dicha institución por 21 años.

El informe concluye que don Luis Octavio Aravena Mardones, presenta daños psicológicos producto de la violencia extrema de la dictadura, especialmente por el asesinato de su hermano, don Jorge Aravena Mardones, pero también producto de otras violencias, como la persecución y el exilio. Al respecto, como daño psicológico destaca el duelo patológico, que se desarrolló por la violenta e intempestiva muerte de don Jorge, lo que limitó la asimilación del fallecimiento, lo que ha implicado que se afecte por sentimientos de profunda tristeza, continuos pensamientos en torno a don Jorge, mecanismos psicológicos de defensa que limitan la comunicación del dolor asociado, y sentimientos de culpa por la muerte del hermano, emoción que le implica identificarse con una culpabilidad ajena y



que limita la elaboración del duelo. Presenta también otros malestares psicológicos, como el quiebre del proyecto de vida, trastorno de estrés postraumático, dificultades de adaptación, así como otros duelos que se añadieron al que ya portaba.

Por otro lado, la vivencia de exilio conllevó una adaptación parcial a las nuevas realidades culturales. Empero, es el retorno a Chile el que lo expone a dificultades de adaptación mayores, esto al encontrarse con un país profundamente diferente al que había dejado años atrás.

Respecto a la evaluación de doña **Lucía Elianira Aravena Mardones**, relata que para el golpe de Estado de 1973 era una mujer de 24 años, casada, madre de tres hijos de modo que los eventos violentos desencadenados afectaron a todo un grupo familiar. Narra que en la madrugada del 12 de septiembre regresa a casa su hermano Luis, quien cuenta la terrible noticia de que don Jorge Aravena había sido asesinado, sintiendo gran desesperación y desencadenando un duelo extremadamente complejo de elaborar por la cercanía que tenía con su hermano. De este modo, el impacto en torno a la muerte de don Jorge es muy significativo, sintiendo la entrevistada que cambió su carácter, se vuelve inapetente y, en plena lactancia se le corta la leche, entre otros síntomas que serán profundizados posteriormente.

Cuenta que su marido, suboficial de la Armada, se opuso al golpe de Estado, siendo apresado por alrededor de un año, condenado por desacatar las órdenes golpistas. Asimismo, sufrió violencias directas, como ser exonerada de su trabajo o, antes de que ello ocurriera, sufrir hostigamiento sexual de parte del jefe de personal designado, a lo que se añade hechos de exilio de sus otros hermanos, la profunda afectación emocional de sus padres y la compleja crianza de tres niños pequeños.

Tras la liberación de su marido acepta la propuesta de la embajada de Suecia de emigrar a la República Democrática Alemana (RDA), comenzando entonces un exilio respecto al cual señala que nunca se acostumbró, pensando continuamente que “al día siguiente volvería a Chile” y en la distancia con sus padres.



Se indica que logra un proceso de integración al nuevo país que, aunque alcanza diversos logros, recibe trabajo, formación en pedagogía para enseñar idiomas, presenta dificultades, además en el plano familiar que es complejo, sintiéndose sobrecargada en la crianza.

Tras la habilitación del retorno a Chile de exiliados, en noviembre de 1982 doña Lucía y su familia vuelven al país, donde se enfrentan a una realidad muy compleja, lo que incide por ejemplo en que la adaptación de los hijos sea difícil, viviendo ellos precariedades que en Alemania no conocían; además, en 1985 su hermana y cuñado son secuestrados y luego relegados, de modo que por un periodo se hace cargo de sus sobrinos. Empero, a pesar de las dificultades, obtiene empleo en el Banco del Desarrollo.

En cuanto al daño que los hechos relatados le ocasionaron, se concluye que doña Lucía Aravena sufrió diversos daños producto de la violencia extrema de la dictadura, destacando, y daño en los vínculos fundamentales, entre otras manifestaciones, trastorno de estrés postraumático, duelo patológico y depresiones, particularmente a propósito del asesinato de su hermano, don Jorge Aravena Mardones y por la disgregación familiar que sufrió.

También desarrolla trastorno de estrés postraumático ligado a lo extremo de las violencias y a la caída de un entramado social y familiar en el que podía sostenerse. En este sentido, es objeto de violencias que socavan su estabilidad psicológica, como el asesinato de su hermano, la prisión política de su marido, la afectación de sus padres, la exoneración y el acoso sexual laboral, entre otros hechos, incidiendo en que desarrolle síntomas traumáticos. Tales como, continua inseguridad, indefensión, miedo constante, insomnio, interrupción de la lactancia y cambios en su personalidad. Junto con ello, se profundiza el mecanismo de defensa de “represión psicológica”, el cual limita la posibilidad de compartir sus dolores, ello en función de sostener a otros que sabía afectados. Por otro lado, el exilio conllevó la profundización de la afectación de sus vínculos con familiares.



En relación al informe de doña Corina Margarita Aravena Mardones, relata que el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 la impactó radicalmente, cambiando su vida, impacto particularmente profundo debido al asesinato, perpetrado por agentes de Estado, de su hermano Jorge Aravena. En este sentido, refiere que previo al golpe de Estado desarrollaba una vida que se encaminaba laboral y familiarmente, No obstante, narra que en los días previos al 11 de septiembre se vivía un ambiente social enrarecido, por lo que el día de la muerte de su hermano se encontraba en Valparaíso, de forma que se enteró 2 días después de su fallecimiento.

Señaló que tras el golpe de Estado, residió en la casa de sus padres, período en que, impactada por el asesinato de su hermano y angustiada por el riesgo que acecha a ella y a su familia, vive con gran miedo y preocupación. Al respecto, su hermano Luis y su esposo eran buscados por agentes de Estado, la familia sufrió múltiples allanamientos e, incluso, fue llevada al cuartel de Investigaciones de General Mackenna para ser interrogada bajo amenaza.

Ante el peligro que los rodeaba, en diciembre de 1973 debió salir de Chile, viajando junto a sus hijas a México, para luego, a fines de diciembre de 1973, trasladarse junto al grupo familiar a la República Democrática Alemana (RDA), país donde vivieron por alrededor de 5 años. Narra que el exilio, a pesar de que se intentó insertar en la cultura y que vivió experiencias relevantes, fue un “tormento”, sintiendo que “vivía en dos lugares”, es decir, físicamente en Alemania, pero con sus pensamientos y sentimientos en Chile.

Por otro lado, relata que una vez que la dictadura habilita el retorno a Chile de personas exiliadas, retorna en 1979 al país, con el propósito de luchar contra la dictadura y bajo el deseo de reencontrarse con sus padres. De esta forma, de regreso en Chile emprende una vida donde se rearticula familiar y políticamente, ya que mantiene una actividad política activa, hasta que en 1985 ella y su actual marido fueron detenidos y relegados, siendo ella enviada a Mejillones y su pareja a Freirina.

Relata que los malestares psicológicos de sus hijos estaban estrechamente ligados al clima de amenaza y peligro que la familia vivía en



Chile, incluso siendo los niños amenazados de muerte por agentes de Estado, por lo que, doña Corina y su familia en 1987 emigran nuevamente, radicándose esta vez en Suecia, país en el que reside hasta la actualidad y donde ha logrado articular una vida.

El informe concluye respecto a los daños producidos, que Corina Aravena producto de la violencia extrema de la dictadura; destacando, entre otras consecuencias, trastorno de estrés postraumático crónico, duelo patológico y depresiones graves con ideaciones suicidas, siendo una de las dimensiones más dañadas su proyecto de vida y el plano familiar, daño que se intensifica a propósito de los exilios vividos.

Por otro lado, otros daños psicológicos presentes tras la violencia extrema del Estado son las depresiones, las cuales en determinados periodos han sido de gravedad, incluso con ideaciones suicidas. Al respecto, el desarrollo de depresiones se vincula por un lado al duelo no elaborado, mencionado previamente, en torno a su hermano Jorge, pero a su vez a las consecuencias en su vida de los exilios vividos. En este sentido, los exilios implicaron un quiebre radical con su contexto social y familiar, llevando a la evaluada a sentir desarraigo, el cual se representa en la sensación de habitar físicamente un país, pero estar con sus pensamientos y emociones en Chile, dificultándose significativamente la adaptación al país extranjero y la canalización de emociones; además, los exilios implicaron la emergencia de intensas angustias de separación respecto a sus padres, especialmente en torno a su madre, pensando continuamente en la posibilidad de que su madre falleciese mientras ella se encontraba fuera de Chile, lo que además la entristecía profundamente.

La prueba testifical aportada por los actores relacionada con los daños experimentados por víctimas de las atrocidades de los agentes del Estado en relación con la vulneración a sus derechos humanos, no hacen más que ratificar los informes psicológicos evacuados en relación a los demandantes, la que al tenor de lo dispuesto en el artículo 384 N°2 del Código Adjetivo, ha de calificarse como plena prueba, al no existir medio de confirmación alguno que dé cuenta de otro antecedente contrario al establecido, aunado a que dichas declaraciones son contestes en el hecho,



prestadas por testigos legalmente examinados, sin tacha y que dieron razón de sus dichos.

En este punto, es evidente que se encuentran acreditados los daños y el nexo causal que existe entre los hechos que conculcaron los derechos humanos de las víctimas y los daños producidos por la situación vivida y el exilio al que fueron sometidos.

Asimismo, no resultó ser un hecho negado por parte de la demandada, la circunstancia de la muerte de Jorge, exilio y experiencias vividas por los demandantes, lo que permite darle un mayor valor a la existencia de los tormentos recibidos por estos.

Noveno: Que las consecuencias psicológicas derivadas de la muerte de Jorge y la gama de situaciones vivenciadas por los demandantes, producto también del exilio, pasando desde cuadros reactivos inmediatos hasta consecuencias de más largo plazo. Los efectos son principalmente sentirse inseguros y atemorizados; humillados, avergonzados y culpables; deprimidos, angustiados y desesperanzados, además de alteraciones de la concentración y de la memoria; presencia de conflictos, crisis y rupturas familiares, así como a problemas de pareja; pérdida de grupos de referencia y de redes sociales; tristeza y sentimientos depresivos que reaparecen a propósito de fechas significativas asociadas con estos sucesos; trastornos del sueño e insomnios crónicos; inhibiciones conductuales, fobias y temores (v. Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Consecuencias de la prisión política y la tortura, Capítulo VIII).

Décimo: Que sobre la base de los hechos relatados han de analizarse los presupuestos de la responsabilidad demandada.

Undécimo: Que, así las cosas, con los hechos asentados a partir de la prueba documental y testifical rendida, permiten tener por acreditado el daño psicológico y moral sufrido por los actores, desde que se produjo la muerte de su hermano Jorge, el exilio y sufrimiento al que se vieron expuestos.

Por su parte, con el mérito de los informes descritos en el motivo octavo de esta sentencia, queda en evidencia que existe un nexo causal entre la acción desplegada por los agentes del Estado que dieron muerte al



hermano de los demandantes, las consecuencias que esto tuvo en la vida personal de cada uno, al exilio al que fueron sometidos y el padecimiento, con el daño que hasta el día de hoy se encuentra vigente, no obstante haber transcurrido casi 50 años de tan lamentables episodios.

Duodécimo: Que, previo a determinar la procedencia de la indemnización y su *quantum*, cabe hacerse cargo, previamente, de las alegaciones de preterición, pago y prescripción hechas valer por el Fisco de Chile.

Décimo tercero: Que respecto de la excepción en torno a la improcedencia de la indemnización demandada, por haber sido preteridos legalmente deberá ser desestimada.

Para ello, hay que precisar que la preterición ha sido concebida como *“la omisión del legitimario por el causante, en su testamento”* y *“tiene sus orígenes en el Derecho Romano, en las primeras limitaciones surgidas a la libertad de testar”* (V. Domínguez Águila, Ramón y Domínguez Benavente, Ramón. *Derecho Sucesorio*, Tomo II, Editorial Jurídica, año 2011, pp. 1070 y 1071).

La defensa de la demandada yerra en este sentido, ya que la preterición constituye una materia de derecho sucesorio, que en determinadas materias el legislador las ha utilizado expresa y restringidamente, como ocurre en el artículo 108 del Código Procesal Penal, motivo por el cual, pese a que la demandada califica como “preterición legal”, la interpretación que le da a la Ley N°19.123, en dicho texto normativo jamás se ha regulado la capacidad procesal o legitimación activa para accionar por indemnización de perjuicios.

Llama la atención que la defensa fiscal insista en un tema que la jurisprudencia del máximo Tribunal ha zanjado en innumerables sentencias, rechazando esta alegación al señalar que: *“(...) también procede rechazar el recurso en cuanto postula la supuesta preterición legal sobre la base de una supuesta decisión del legislador, que habría privilegiado el resarcimiento los familiares más próximos al afectado, ya que cada vez que se ha optado por establecer un orden legal respecto de beneficios o posibilidades de accionar, existen disposiciones expresas que así lo*



resuelven, lo que en la especie no sucede, pues la única limitante que tienen quienes reclaman un daño sufrido como consecuencia del actuar de agentes del Estado es demostrar la existencia de dicho detrimento, de manera que formalmente basta con alegar su concurrencia y la relación con la víctima para plantear la pretensión, lo que en este caso está satisfecho” (C. Suprema, Considerando Cuadragésimo Segundo en causa rol N°62.036-2016, entre otros).

En conclusión, las normas invocadas por la demandada tienen el carácter de especiales y aplicables únicamente a la materia que regulan, pero en caso alguno pueden regular la legitimación activa de los actores en esta causa, quienes en su calidad de hermanos de la víctima, ya que cada vez que se ha optado por establecer un orden legal respecto de beneficios o posibilidades de accionar, existen disposiciones expresas que así lo resuelven, lo que en la especie no sucede.

Entender lo contrario, violenta expresamente el principio de legalidad y de reparación integral del daño que no sólo es reconocido a nivel internacional, sino que nuestro propio ordenamiento jurídico también lo reconoce en el artículo 2314 del Código Civil.

Asimismo, hay que tener presente que la Ley N°19.123 estableció una pensión mensual de reparación en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política (artículo 17), pensión que tiene fijada por ley el monto y los beneficiarios, los que por lo demás son desagregados según sea la vinculación que tengan con la víctima y su edad, instituyendo beneficios médicos (artículo 28) y educacionales (artículos 29; 30; y, 31), entre otros.

Por otro lado, la desagregación que efectúa la ley en comento para efectos de otorgar beneficios pecuniarios a las familias y víctimas de violaciones a los derechos humanos, en caso alguno implica la incompatibilidad con la indemnización que por este proceso civil se persigue, respecto del daño directo que han experimentado los demandantes, siendo del todo errada la alegación interpuesta por el Fisco.

Por otro lado, señala que en la indemnización está limitada la determinación de quiénes son los sujetos de daño por repercusión o rebote



para deducir acciones pecuniarias, lo cual no tiene cabida en el caso de marras, por cuanto, ha quedado debidamente acreditado que el daño demandado es directo, producto del padecimiento que los demandantes han vivenciado desde el año 1973, el cual tuvo su origen con la muerte de su hermano. Sin embargo, el marco fáctico propuesto por los actores da cuenta de una serie de otras circunstancias que los afectaron personalmente, como lo es el exilio que, entre otros padecimientos y sufrimientos, los cuales ya se han explicado latamente en los considerandos anteriores, permite establecer que en ningún caso podemos considerarlos como víctimas por rebote.

Sumado a lo anterior, hay que tener presente que los beneficios pecuniarios que contempla la Ley N°19.123 tienen una naturaleza asistencial y por ende, no privan a las víctimas de instar por la reparación efectiva de todo daño sufrido, motivo por el cual la alegación no tiene sustento, ya que si bien los demandantes no son beneficiarios de la pensión antes referida, esto no obsta a que puedan ejercer su acción en miras a que el daño propio ocasionado producto de la muerte de su hermano por agentes del Estado y todo el sufrimiento vivido luego de esta circunstancia les sea reparado.

Además, la demandada ha sostenido improcedentes las indemnizaciones al haber sido ya reparados integralmente con compensaciones otorgadas en el marco de la justicia transicional, mediante beneficios, reparaciones simbólicas y/o satisfactivas, y que han sido parte importante de la reparación por los daños morales causados a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que se ha efectuado a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones.

Afirmó que lo pretendido fue entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir o morigerar el daño moral. Asimismo, la demandada hizo referencia a la identidad de causa entre lo pedido en autos y las reparaciones realizadas.

Así, concluyó que los esfuerzos del Estado para reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos no solo han cumplido todos los



estándares internacionales de justicia transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con la realidad financiera que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencias de tales violaciones. Los referidos mecanismos de reparación han compensado parcialmente aquellos daños no pudiendo, por ello, exigirse nuevas reparaciones.

Sobre el particular, con la prueba rendida no se da cuenta de los beneficios que habrían favorecido a los demandantes, por tanto no puede hacerse lugar a una excepción de esa naturaleza, porque la ley que las previno no las estableció con carácter excluyente, de suerte tal que no es posible concluir que por su otorgamiento son improcedentes las indemnizaciones que ahora se solicitan, por lo mismo solamente nos cabe rechazar **la alegación de preterición** formulada por el Fisco de Chile.

Décimo cuarto: Que en cuanto al pago planteado por el Fisco de Chile, dicha resistencia se basa en que la Ley N°19.123 establecería beneficios pecuniarios y de otro tipo para los familiares de víctimas de derechos humanos cuyo objetivo sería el de indemnizar justamente el daño por ellas sufrido a consecuencia de actos lesivos desarrollados por agentes del Estado. Señalando que no obstante haber sido descartados los demandantes de pagos directos en dinero, se les consideró en diversos desagravios de carácter simbólico y en programas, especialmente de salud, para reparar el daño moral, como se explicará.

Lo anterior importa analizar la naturaleza jurídica de los beneficios contemplados en la referida ley, para luego verificar si respecto de ello concurren los presupuestos del pago invocado.

Que la historia fidedigna de la Ley N°19.123, en cuanto elemento de interpretación de la ley, según lo dispone el inciso segundo del artículo 19 de Código Civil, pone de manifiesto que durante la tramitación parlamentaria, el debate fue justamente sobre la conceptualización y determinación de la naturaleza jurídica de los beneficios pecuniarios que se otorgarían por medio de ella.

El Senador Máximo Pacheco, refiriéndose a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, sostuvo que la misma “*entendió por reparación un*



conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia del informe. La reparación ha de convocar a toda la sociedad chilena; ha de ser un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas. El proceso de reparación supone el coraje de enfrentar la verdad y la realización de justicia; requiere de generosidad para reconocer las faltas y de actitudes de perdón para llegar al reencuentro de los chilenos. Es verdad que la desaparición de o la muerte de un ser querido constituyen pérdidas irreparables; por lo que no es posible establecer una correlación entre el dolor, la impotencia y las esperanzas de las víctimas, con las medidas que se proponen. No obstante ello, la reparación moral como material, parece ser una tarea absolutamente necesaria para el afianzamiento de una democracia plena”.

Por su parte, interviniendo el Ministro de Estado señor Correa, a la época, Secretario General de Gobierno, expresó que “*El informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, concordante con el mandato del Presidente de la República, presentó al país el cuadro de una situación desgarradora (...) y ha informado (...) del dolor de todos, sin mirar el color de los que murieron por violaciones a los derechos humanos y de quienes murieron por violencia política*” y agregó que “*El reconocimiento de responsabilidades, la administración de justicia por tribunales competentes –de acuerdo a la ley vigente- y la reparación parcial del daño, son las obligaciones que han debido asumir –y deben seguir haciéndolo- los Poderes Públicos y las dirigencias políticas, sociales, religiosas y humanitarias. El proyecto de ley que hoy se somete a la consideración de la Sala se inscribe en ese propósito. Por un lado establece compensaciones y pensiones para los familiares directos de las víctimas y, por otro, encarga a una corporación de alto nivel, designada por el Presidente de la República y con acuerdo del Senado, el cumplimiento, por un tiempo fijo, de las labores de asistencia y apoyo a aquéllos, así como de la ejecución de las recomendaciones de la propia Comisión Nacional de Verdad y*



Reconciliación, en orden a complementar antecedentes en los casos en los que ella no se formó convicción”.

Es en este contexto, tal como lo exponen las autoridades citadas, que se presenta el proyecto de ley que termina siendo aprobado y que crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y establece beneficios a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

En relación con la historia fidedigna de la ley, sumado a las características de los beneficios que ella otorga, es posible concluir que no se trata de una reparación total al daño sufrido por las víctimas, sino de una política asistencial desarrollada por el Estado de Chile respecto de los familiares de las víctimas, conceptualización que permite entender los beneficios que se conceden, como por ejemplo, los relacionados con educación y salud, los que quedan supeditados a condiciones objetivas para su goce, como lo es la edad y el hecho de estar o no cursando estudios superiores.

Consecuencia de lo reseñado precedentemente es que los beneficios pecuniarios que contempla la Ley N°19.123 tienen una naturaleza asistencial y por ende no privan a las víctimas de instar por la reparación efectiva de todo daño sufrido.

En este punto, conviene precisar que son numerosas las sentencias nacionales que afirman que entre nosotros rige el llamado “principio de la reparación integral o completa”, el cual ordena que la reparación que se decrete deba ser exactamente igual al daño sufrido.

En tal sentido se ha resuelto que la reparación “debe ser completa, igual al daño que se produjo, de tal forma que permita a la víctima reponer las cosas al estado en que se hallaban antes de la comisión del delito que la afectó; debiendo quedar su patrimonio como si el daño no se hubiera producido (v. C. Suprema, 10 de enero de 1985, en Rev., t. 82, sec. 4°, pág. 4. En el mismo sentido, C. Apelaciones de Santiago, 9 de mayo de 1985, Rev., t. 82 sec. 4°, pág. 151 y C. S., 10 de octubre de 1985, Rv., t. 82, sec. 4°, pág. 240).

En nuestro ordenamiento jurídico, el principio de la reparación integral encuentra su asidero en el artículo 2314 del Código Civil y, muy



especialmente, en el inc. 1° del artículo 2329 de dicho cuerpo normativo que señala: “*Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta*”.

El profesor Ramón Domínguez Águila hace ver que para afirmar con propiedad si en un sistema jurídico se reparan efectivamente todos los daños es menester indagar sobre dos aspectos:

a)Cuál es la noción de daño que se tiene, y si dentro de ésta se cubren efectivamente todas las alteraciones a la situación existente antes del hecho dañoso (punto de vista cualitativo), y

b) Si en el hecho se reparan todos los daños sufridos, lo que, mirado desde el punto de vista de la indemnización pecuniaria, consiste en saber si “en equivalencia monetaria se hace pagar al hechor la integridad de aquellos que en un cierto sistema se considera que son daños” (v. Domínguez Águila, Ramón, *Consideraciones en torno al daño en la responsabilidad civil. Una visión comparatista*, en *Revista de Derecho, Universidad de Concepción*, N°136, 1966, pp. 136 y 137).

Aclarado lo anterior, hay que precisar que la normativa invocada por el Fisco no contempla en su texto incompatibilidad alguna con la indemnización que por este proceso civil se persigue y no resulta procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata, como se dejó asentando en los párrafos precedentes, de formas distintas de reparación y, el que las asuma el Estado voluntariamente, no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que la tutela judicial efectiva declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley, pues pensar de otra manera, sería aceptar que el responsable del daño sea quien fije la cuantía de la indemnización a pagar.

Por lo anteriormente razonado, es que **se desestima la excepción de pago opuesta por el Fisco de Chile.**

Décimo quinto: Que, en cuanto a la prescripción de las acciones civiles, afirma que desde la fecha de los hechos y aquella de interposición de éstas, han transcurrido con creces los plazos de cuatro o cinco años previstos en los artículos 2322 y 2515 del Código Civil, respectivamente.



Si bien dichos argumentos tienen plena aplicación en nuestro ordenamiento jurídico en relación al derecho común, esta alegación debe ser rechazada para el caso *sub judice*, por cuanto el plazo de prescripción de la responsabilidad extracontractual y ordinaria, de cuatro y cinco años, respectivamente, invocados por el Fisco de Chile no son aplicables en la especie, atendida la naturaleza y origen del daño cuya reparación ha sido solicitada, pues dichos plazos de prescripción, en esta clase de acciones, no ha de computarse, necesariamente, desde la ocurrencia del hecho que debe ser indemnizado, como es la regla general.

En concepto de este sentenciador, por tratarse de una violación a los Derechos Humanos el criterio rector en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil encuentra ínsito en las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior, ha de ser necesariamente así porque este fenómeno de transgresiones tan graves, es muy posterior al proceso de codificación y por ello, el legislador de antaño no los consideró, por cuanto sólo se representó criterios claramente ligados al interés privado, sin que fuera posible advertir situaciones de quiebres no sólo institucionales y del ordenamiento jurídico, sino también de crímenes que traspasan las barreras del derecho común.

Es por ello que, a modo de ejemplo, resulta pertinente citar los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos en las que se previene que cuando ha habido una violación a los derechos humanos, surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Atendida la naturaleza de las normas citadas, en las que no se contempla un estatuto extintivo relacionado con el transcurso del tiempo, claramente, no es posible concebir la prescripción de la acción penal, lo que conduce a preguntarse qué podría justificar que este motivo de extinción de responsabilidad fuese adjudicado a la responsabilidad civil conforme con los extremos del Derecho privado si la responsabilidad penal siempre será exigible.

La pregunta formulada busca la explicación acerca del motivo que justificaría enfrentar la responsabilidad penal a partir de criterios particulares



propios de la naturaleza del hecho, y al mismo tiempo ocuparse de la responsabilidad civil desde orientaciones válidas para otras materias. En este punto una primera aproximación interpretativa nos llevaría a concluir que, si donde existe la misma razón, se aplica la misma disposición, es inconcuso que la responsabilidad civil debe asumir el mismo tratamiento que la punitiva.

Por otro lado, la cuestión de los Derechos Fundamentales constituye un sistema, y por tal razón, no es posible interpretar los hechos que los afecten y las normas que los regulan de una manera aislada, como tampoco pueden introducirse normas que sean consecuencia de otros criterios orientadores vinculados a finalidades que exceden la naturaleza de esta clase de derechos, como son las que han sido invocadas por la demandada, porque toda conclusión alcanzada en tales circunstancias, necesariamente, será contraria al sistema jurídico de los Derechos Fundamentales.

El mismo Andrés Bello, al concebir las normas sobre interpretación de la ley, hizo presente en el artículo 22 del Código Civil que *“el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.”*

Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto”.

Por lo mismo, no se advierte ninguna razón para hacer una distinción relacionada con la imprescriptibilidad de la acción penal en delitos de lesa humanidad, con la imprescriptibilidad en materia de responsabilidad del Estado, derivada de la comisión de dichos ilícitos.

Por ello, ha de entenderse que la cuestión de la prescripción de la acción indemnizatoria, no puede ser resuelta con un enfoque plasmado en las normas del Derecho privado, porque estas atienden fines diferentes y en pasaje alguno del Código Civil, se hace mención a los ilícitos relacionados con vulneración a los derechos humanos.

Si por un minuto, aceptásemos la tesis de la resistencia opuesta por el Fisco de Chile, ciertamente, se vulneraría la citada norma de la Convención Americana de Derechos Humanos y, además, la del artículo 5° de la Constitución Política de la República, que junto con reconocer el



carácter vinculante de los instrumentos de Derecho internacional, establece para los órganos del Estado el deber de respetar y promover los derechos fundamentales, entre los que ha de situarse el de indemnización que ha sido invocado en estos autos.

En este aspecto, no está demás hacer presente que las normas de derechos fundamentales han de ser interpretadas sobre la base del denominado principio “*pro homine*”, es decir, a favor de la persona humana, motivo por el cual, debe preferirse aquel ejercicio hermenéutico que tienda dar protección y reparación integral a la víctima de la vulneración de un derecho fundamental por parte del actuar sistemático del Estado en orden a vulnerar los derechos humanos.

Décimo sexto: Que por último, esta excepción de prescripción deberá ser rechazada utilizando como criterio y herramienta jurídica el denominado “control de convencionalidad”, institución que busca que los Estados se abstengan de aplicar normas contrarias a la *Convención Americana sobre Derechos Humanos* (CADH) o a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta doctrina que emana del Control de Convencionalidad exige que los jueces y otros órganos nacionales dejen sin aplicación la legislación nacional cuando la misma resulte contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos o a la interpretación que de ella haga la Corte Interamericana, siendo este el último caso que este sentenciador abordará.

En efecto, a partir del dictado de la sentencia recaída en el Caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile, de 29 de noviembre de 2018, específicamente, para nuestro país, se estableció que “*El Estado es responsable por la violación del derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma (...)*”.

El fundamento de la condena del Estado de Chile y las medidas de reparación que se dispusieron en el fallo, descansan, precisamente, en la errada aplicación de la prescripción civil ordinaria en relación con las



acciones civiles tendientes a indemnizar a las víctimas de derechos humanos.

En este punto, el fallo en estudio señaló que:

“76. En reiterada jurisprudencia, este Tribunal se ha referido al amplio contenido y alcances del derecho de acceso a la justicia, en el marco de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma.

77. En particular, en casos de graves violaciones de derechos humanos y de manifiesta obstrucción de justicia, este Tribunal ha considerado que “en ciertas circunstancias el Derecho Internacional considera inadmisibles e inaplicables la prescripción [penal,] así como las disposiciones de amnistía y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, a fin de mantener vigente en el tiempo el poder punitivo del Estado sobre conductas cuya gravedad hace necesaria su represión para evitar que vuelvan a ser cometidas.

78. En relación con lo anterior, este Tribunal es consciente de los desarrollos que existen en el Derecho Internacional en materia de aplicabilidad del instituto jurídico de la prescripción a acciones judiciales para obtener reparaciones frente a graves violaciones de derechos humanos.

79. Así, desde 1989 el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias señaló, en sus Observaciones Generales respecto del artículo 19 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que las ‘acciones civiles de indemnización no [...] estarán sujetas a la prescripción’.

80. El entonces Relator sobre el Derecho a la Restitución, Indemnización y Rehabilitación por Graves Violaciones a los Derechos Humanos, Theo Van Boven, en 1993 señaló que ‘[...] la aplicación de prescripciones priva con frecuencia a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos de las reparaciones a que tienen derecho. Debe prevalecer el principio de que no estarán sujetas a prescripción las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos



humanos. En este sentido, hay que tener en cuenta que las consecuencias de las violaciones flagrantes [...] son el resultado de los crímenes más odiosos que, según opiniones jurídicas muy acreditadas, no deben estar sujetos a prescripción. Además, está suficientemente probado que, para la mayoría de las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos, el paso del tiempo no ha borrado las huellas, sino todo lo contrario, pues ha provocado un aumento del estrés postraumático que ha requerido todo tipo de ayuda y asistencia material, médica, psicológica y social durante mucho tiempo’.

81. El Conjunto Actualizado de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad, adoptados en 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, incluyó lo siguiente:

Principio 23. Restricciones a la prescripción. La prescripción de una infracción penal, tanto en lo que respecta a las diligencias como a las penas, no podrá correr durante el período en que no existan recursos eficaces contra esa infracción. La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación. [...]

Principio 32. Procedimientos de reparación. Tanto por la vía penal como por la civil, administrativa o disciplinaria, toda víctima debe tener la posibilidad de ejercer un recurso accesible, rápido y eficaz, que incluirá las restricciones que a la prescripción impone el principio 23.

82. En 2006 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones. Los principios 6 y 7 de dicho instrumento indican:

6. Cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales, no prescribirán las violaciones



manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional.

7. Las disposiciones nacionales sobre la prescripción de otros tipos de violaciones que no constituyan crímenes en virtud del derecho internacional, incluida la prescripción de las acciones civiles y otros procedimientos, no deberían ser excesivamente restrictivas.

83. Asimismo, tal como indicó la Comisión, existen algunos desarrollos en la materia en el derecho comparado en ciertos países. Por ejemplo, el Consejo de Estado de Colombia ha emitido múltiples sentencias en que ha inaplicado el plazo de dos años de caducidad de acciones reparación directa contra el Estado, cuando se trata de daños ocasionados por la comisión de un crimen de lesa humanidad, ponderando entre la seguridad jurídica –que buscan proteger los términos de caducidad– y el imperativo de brindar reparación del daño ocasionado en este tipo de delitos:

Desde este punto de vista, la caducidad se institucionaliza como un concepto temporal, perentorio y preclusivo de orden, estabilidad, interés general y seguridad jurídica para los asociados y la administración desde la perspectiva procesal, generando certidumbre y materializando el ejercicio razonable y proporcional que toda persona tiene para hacer valer sus derechos ante las autoridades judiciales.

[...] Todo lo anterior sin perjuicio de las excepciones que ha elaborado la jurisprudencia de esta Corporación cuando ha advertido que los hechos que sustentan el medio de control de reparación directa admiten su encuadramiento como un acto de lesa humanidad [...]

Así, se tiene que los de lesa humanidad se comprenden como ‘aquellos actos ominosos que niegan la existencia y vigencia imperativa de los Derechos Humanos en la sociedad al atentar contra la dignidad humana por medio de acciones que llevan a la degradación de la condición de las personas, generando así no sólo una afectación a quienes físicamente han padecido tales actos sino que agrediendo a la conciencia de toda la humanidad’ [...]



Ahora bien, la importancia del concepto de lesa humanidad para el ámbito de la responsabilidad del Estado consiste en predicar la no aplicación del término de caducidad en aquellos casos en donde se configuren tales elementos, pues, siendo consecuente con la gravedad y magnitud que tienen tales actos denigrantes de la dignidad humana, es que hay lugar a reconocer que el paso del tiempo no genera consecuencias desfavorables para quienes (de manera directa) fueron víctimas de tales conductas y pretenden la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por los daños antijurídicos irrogados en su contra; pues resulta claro que allí no solo se discuten intereses meramente particulares o subjetivos sino también generales que implican a toda la comunidad y la humanidad, considerada como un todo.

En consecuencia, entiende el Despacho que en aquellos casos donde se encuentre configurado los elementos del acto de lesa humanidad o que generen posibilidad que así sea tratado, habrá lugar a inaplicar el término de caducidad del medio de control de reparación directa, conforme a lo expuesto.

(...)

85. Asimismo, tal como lo hicieron notar la Comisión y el propio Estado, la jurisprudencia de los últimos años de la Corte Suprema de Justicia chilena ha variado sustancialmente, declarando en numerosos casos concretos la imprescriptibilidad de la acción civil indemnizatoria por daños derivados de delitos de lesa humanidad, integrando para ello argumentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Décimo séptimo: Que la jurisprudencia internacional reproducida en el motivo precedente, entendida como la doctrina que emana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha puesto de relieve que la aplicación del estatuto de la prescripción de las acciones de reparación patrimonial derivada de los delitos de lesa humanidad resulta inadmisibles, habiendo incurrido nuestro país, en responsabilidad internacional por dicha forma errada de interpretar el Derecho, al hacer aplicable estatutos jurídicos totalmente disímiles a la interpretación que viene sosteniendo la referida Corte en asuntos derivados de dicha reparación patrimonial y que subyace,



con ocasión de los ilícitos cometidos agentes del Estado en tiempos de dictadura, los que son calificados como crímenes de lesa humanidad.

Décimo octavo: Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un rol principal en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Consciente de su papel, la Corte busca tener un amplio impacto en el panorama de los derechos humanos en el Hemisferio, para lo cual desarrolló la doctrina del *control de convencionalidad*, que busca expandir el efecto de sus sentencias. En términos generales, esta doctrina es algo similar a la idea de control de constitucionalidad, pero con varias diferencias clave, principalmente, su aplicación en el ámbito del Derecho internacional (v. Paúl Díaz, Álvaro, *Los enfoques acotados del control de convencionalidad: las únicas versiones aceptables de esta doctrina*, en Revista de Derecho (Concepción), vol. 87, N°246, dic. 2019).

No está demás decir que esta fuente del derecho internacional nació, a propósito de otro incumplimiento internacional por parte del Estado de Chile, esta vez, en el caso Almonacid Arellano vs. Chile.

Por lo anterior, si se realiza el debido contraste entre la doctrina que emana del fallo internacional antes citado con el caso *sub judice*, queda de manifiesto que resulta inadmisibles aplicar la prescripción, ya que dicha institución cede ante las fuentes del derecho internacional, dentro de las cuales, se encuentra la sentencia del Caso Órdenes y otros vs. Chile, que señala su improcedencia.

Décimo noveno: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia del cobro de reajustes e intereses, el Fisco de Chile plantea que éstos solamente pueden devengarse en la medida que la sentencia los acoja y la obligación se establezca, los que sólo podrán devengarse, para el evento que se acoja la pretensión del actor civil, desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y el representado de la defensa incurra en mora.

Sobre el particular, este sentenciador estima que este planteamiento es acertado, particularmente, porque este punto no ha sido reglamentado por el Derecho Internacional y por ello debemos recurrir a las normas del derecho común.



Es por ello que en relación con el cobro de los reajustes e intereses, los mismos se devengarán desde la fecha en que el presente fallo quede ejecutoriado, de conformidad a lo dispuesto en artículo 1557 del Código Civil, en relación con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.

Vigésimo: Que, rechazadas las alegaciones y excepciones anteriores, hay que hacerse cargo de la cuantificación del daño moral, conforme a los perjuicios provocados y para establecerlo, se cuenta con la prueba establecida en considerando quinto de este fallo.

En este punto, los informes psicológicos acompañados y que fueron efectuados por PRAIS, dan cuenta que los actores fueron gravemente afectados en diversos momentos de su historia personal, principalmente, a partir del año 1973.

Dichos informes son concordantes con declaraciones de testigos quienes dan cuenta del daño psicológico derivado de la persecución, el exilio y otras experiencias traumáticas vividas por los demandantes.

Concluye que estos tienen duelo patológico, trastorno de estrés postraumático, depresiones, daño en los vínculos fundamentales, dificultades de adaptación.

Refiere que los actores tuvieron un importante quiebre vital, con un antes y después de las experiencias.

Los documentos no fueron objetados de contrario, motivo por el cual, debe ser valorados conforme las reglas de los artículos 1700 y 1702 del Código Civil y al efecto, se puede establecer, nítidamente, las secuelas que produjeron en los actores los actos de violencia, persecución, exilio y muerte de su hermano.

Conforme a los antecedentes antes analizados, es evidente que en contextos de abuso y vulneración de Derechos Humanos, emerge un concepto e institución fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el Daño Moral, bajo la dimensión del *pretium doloris*, institución que es concebida por nuestra jurisprudencia como las aflicciones, pesares, molestias y sufrimientos que experimenta una persona como consecuencia de maniobras de tortura, maltrato físico y psicológico, considerados hechos ilícitos que deben ser indemnizados.



Sobre la base de lo anterior y dadas las graves secuelas producidas por los hechos ilícitos que lamentablemente vivenciaron los actores con ocasión de la muerte de su hermano, la experiencia de exilio y demás hechos que fueran descritas en extenso en el motivo octavo de este fallo, este sentenciador estima prudente y de justicia regular el monto de la indemnización por concepto de daño moral en la suma de **\$40.000.000** (cuarenta millones de pesos), **para cada uno de los demandantes**, la que se condice con las circunstancias lesivas establecidas en el proceso y sus secuelas posteriores.

Vigésimo primero: Que en cuanto a la petición subsidiaria de rebaja del monto pedido, fundado en los parámetros establecidos por otras sentencias en la materia, deberá estarse a lo resuelto, máxime considerando que el monto fijado se adecua a los baremos que ordinariamente se fijan por los tribunales superiores para casos como el de marras.

Vigésimo segundo: Que la suma ordenada pagar en el motivo vigésimo, se reajustará conforme a la variación del índice de precios al consumidor por el periodo que media entre que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada y el pago efectivo.

En el mismo período, las sumas referidas devengarán interés corriente, de conformidad a lo dispuesto en artículo 1557 del Código Civil, en relación con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.

Vigésimo tercero: Que atento lo resuelto y siendo acogida la demanda en su parte esencial, se condena al Fisco de Chile al pago de las costas del juicio por haber resultado vencida.

Por estas consideraciones, normas legales e internacionales citadas y visto, además, lo dispuesto en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, 170 y 144 del Código de Procedimiento Civil **se decide:**

I. Que **se acoge** la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por don **Nelson Guillermo Caucoto Pereira**, en representación de doña **Lucía Elianira Aravena Mardones**, doña **Corina Margarita Aravena Mardones** y, don **Luis Octavio Aravena Mardones**, en contra del **Fisco de Chile**.



II. Que **se rechazan**, en consecuencia, todas las alegaciones y excepciones principales deducidas por el Fisco de Chile.

III. Que a título de indemnización por concepto de daño moral se dispone el pago de la suma de **\$40.000.000** (cuarenta millones de pesos), señalada en el motivo vigésimo, a cada uno de los demandantes.

IV. Que en cuanto al planteamiento subsidiario formulado por el Fisco de Chile, ha de estarse a lo resuelto en el romano precedente.

V. Que la suma ordenada pagar lo será conforme a los reajustes e intereses establecidos en el motivo vigésimo.

VI. Que **se condena** en costas al Fisco de Chile.

Regístrese, notifíquese, consúltese si no se apelare y en su oportunidad, archívese.

Rol N° C-1942-2021.

Pronunciada por don **Patricio Hernández Jara**, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, nueve de agosto de dos mil veintidós.**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JCXQXXGZXXX